



*Narciso Zafra de la Torre  
Marcelo Castro López  
Francisca Hornos Mata*

## *ARQUEOS* y la gestión del Patrimonio Arqueológico

1. Registrar para actuar sobre el Patrimonio Arqueológico
2. Espacio, tiempo y fichas
3. Bases de datos, datos de base
4. Saber y poder

## 1. REGISTRAR PARA ACTUAR SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Se presentan a continuación unas reflexiones acerca del Sistema de Información ARQUEOS desarrollado por el Centro de Documentación del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Con idea de obtener un enfoque amplio iniciamos una encuesta sobre la calidad de la información y los usos de ARQUEOS en las distintas dependencias de la Consejería de Cultura donde su utilización parece obligada, pero tras los primeros resultados acusamos recibo de lo previsible y obvio de las respuestas: ARQUEOS se utiliza en todas (servicios centrales y periféricos) y para todos los usos (solicitudes de información, planeamiento, impacto ambiental, proyectos de investigación, expedientes sancionadores...) y a las aplicaciones mas complejas (por ejemplo fichas relacionadas) no se les saca todo el partido. Decidimos por tanto dar un giro a nuestras pretensiones y basar las reflexiones de una parte en nuestra propia experiencia en el uso de esta herramienta en una administración periférica como es la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura en Jaén, y de otra en una disposición a la crítica de nuestro propio trabajo que nos impide considerar su procedimiento y resultados como una práctica "virtuosa", una aplicación mecánica de conocimientos adquiridos.

En el texto se procura huir de detalles técnicos, sobre nomenclaturas o aplicaciones que hemos tenido la fortuna de discutir en otras ocasiones con el equipo del I.A.P.H. que ha venido desarrollando este sistema, al que hay que agradecer su talante abierto a la discusión. Por el contrario nos parecía que nuestra contribución debía encaminarse a otros propósitos. Así en primer lugar se intenta dirigir esta reflexión hacia una situación de partida: cualquier recopilación sistemática de información sobre el Patrimonio Arqueológico se nutre de una labor de conocimiento y se ampara en procedimientos desarrollados y dispuestos en el marco general de la disciplina arqueológica. Si empezamos por la misma noción de 'sitio arqueológico' o concluimos en una propuesta de adscripción tipológica, cronológica o cultural estamos, además de poniendo

en funcionamiento un procedimiento administrativo que se encuentra tras la acción concreta de inventariar, haciendo uso de una manera de conocer que había sido desarrollada por la arqueología mucho antes de diseñar el propio inventario. En este sentido cualquier reflexión acerca del inventario requiere una reflexión previa sobre las características de la información recopilada desde la disciplina arqueológica.

En segundo lugar la información recopilada en ARQUEOS ha sido el resultado de un esfuerzo continuado de la administración andaluza de los bienes culturales que, al menos en la provincia de Jaén, tuvo un precedente inmediato previo a la transferencia de competencias en materia de cultura. Las vicisitudes de la formación de este cuerpo de documentación durante tantos años merecerían un examen detenido que no creemos que sea el cometido de esta contribución, simplemente queremos señalar que la uniformidad parece haberse dirigido exclusivamente a la utilización de una serie de formularios o fichas comunes, en las que incluso en las mismas normas de cumplimentación se podrían encontrar diferencias importantes (por ejemplo nadie ha apuntado jamás aquellas evidencias que debían ser identificadas como villa romana) o en las prioridades de actuación (comarcas, tipologías, etc.). Como antes se apuntaba el estado actual del inventario en ARQUEOS obedece sin duda a estas decisiones primeras, y en definitiva si reconocemos una diversidad de propósitos y, tal vez, otras divergencias mas profundas, se debe admitir que ARQUEOS constituye el primer producto-herramienta dispuesto para unificar, para homogeneizar, y esta circunstancia debe ser destacada como una aportación de partida del programa. Por vez primera se dispone en este campo de un elemento unificador de todo el territorio de Andalucía, algo que por su propia obviedad nunca será bastante enfatizado.

Una tercera cuestión abordable a propósito de ARQUEOS se refiere a las conexiones con figuras de protección y procedimientos administrativos concretos referidos al Patrimonio Arqueológico, desde las inscripciones con carácter específico en el Catálogo hasta las declaraciones de impacto ambiental, que forzosamente deman-

dan información arqueológica y además constituyen uno de los principales quehaceres de la administración de los bienes culturales. Esta dimensión del inventario informatizado lo convierten en el apoyo de instrumentos legales poderosos y, en ocasiones, muy contestados que exigen una labor redoblada de fiabilidad científica y destreza técnica.

La reflexión sobre estos aspectos que a continuación se expone puede llegar a alcanzar un cierto tono sombrío que no debe leerse como desesperanza porque se ha escrito como una autocritica realista y sin concesiones pero con la intención positiva de detectar las disfunciones y proponer soluciones.

## 2. ESPACIO, TIEMPO Y FICHAS

Tradicionalmente el primer objetivo (y en demasiadas ocasiones el único) de la investigación arqueológica ha sido la ubicación del objeto investigado en el tiempo y en el espacio. El éxito en esta tarea se medía por el grado de definición alcanzado en la localización espacial y por el de precisión en el marco temporal. El milímetro y el segundo eran las marcas a batir.

En esta tarea la inmensidad del espacio-tiempo arqueológico suponía un escollo que se abordó mediante un proceso doble. Por un lado los métodos de análisis se concretaron en sistemas de registro cada vez más ambiciosos que se proclamaron exhaustivos, pretendiendo alcanzar la totalidad de los fenómenos arqueológicos observables. Por otro el espacio y el tiempo se parcelaron para obtener objetos de estudio abarcables, adaptados, como no podía ser menos, a los campos de investigación tradicionales (arqueología prehistórica, clásica, medieval...).

La primera consecuencia es que el tiempo y el espacio quedan dispuestos para su reparto entre los investigadores que colonizan su parcela y la defienden frente a los intrusos. La segunda consecuencia es la definición de secciones inconexas y el consiguiente establecimiento de una serie interrumpida de procesos, o si se prefiere de una secuencia de procesos interrumpidos.

Esta vía de apropiación del objeto de estudio impedía la formación de un corpus de datos que, siquiera en líneas generales, recogiera una realidad arqueológica que iniciaba en los años 80 del pasado siglo un cambio definitivo. Al análisis del pasado material, que la tradición académica fija como objeto formal de estudio, se le estaba sumando la proyección social que cualquier intervención arqueológica tiene hoy. Por ello nuestro renovado objeto de estudio es en tanto que análisis del pasado el espacio-tiempo producido por la sociedad: el territorio; y en cuanto fundamento de un proyecto social es la concreción de ese territorio en un bien social: el Patrimonio Histórico.

Esta nueva realidad necesariamente convierte en inoperante aquella información dividida, repartida y dispersa, ya que su principal función sería la de servir como base de una política patrimonial. Evidencia de esta necesidad es que la Ley 1/1991 ordena la elaboración del Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía (art. 6), con la intención de dar una cobertura de máximo nivel a los inventarios que por parte de la administración autonómica venían formalizándose desde 1986.

En lo tocante al Patrimonio Arqueológico ese inventario, embrión del catálogo, contenía información esquemática que se plasmaba sobre el mapa como un conjunto de puntos. La escala 1:50.000 permite señalar la posición de un sitio arqueológico, dato necesario pero no suficiente para la caracterización espacial del mismo, dado que el punto que lo indica es un símbolo y como tal carece de entidad espacial (un punto de 3 mm de diámetro equivaldría a una superficie de 1.76 has.). Cualquier intento de traslación a escalas mayores soporta errores del orden de 50 m x mm, con lo que la efectividad del inventario se veía muy reducida. Este problema no cabe achacarlo a su calidad como instrumento que era innegable, como demuestra el hecho de que sus dos versiones fueron indispensables entre 1986 y 1996, sino a la inadecuación entre los objetivos convencionales de la investigación arqueológica y las necesidades de información de la administración cultural. En efecto el inventario recogió el estado de la cuestión entre 1985 y 1988, volcando inventa-

rios previos, publicaciones y noticias, ordenándolos según criterios territoriales y crono-tipológicos. Incluso en casos de especial significación se realizaron revisiones sobre el terreno. Pero la labor era inmensa: millares de registros dispersos en un espacio con 87.000 km<sup>2</sup> que arrastraba 1.4 millones de años de historia humana.

Los instrumentos que acompañaban o desarrollaban a este inventario se multiplicaron y complicaron con los años y así se elaboraron el Catálogo de Yacimientos con Pinturas Rupestres y Carta de Riesgo del Patrimonio Arqueológico Subacuático, y aumentó exponencialmente la cantidad de información procedente de proyectos e Informes de intervenciones arqueológicas sistemáticas y de urgencia, del planeamiento urbano o territorial, de las fichas-diagnóstico de conservación, de los expedientes de declaración de Bien de Interés Cultural, de los de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, de las zonificaciones arqueológicas, de las cartas de riesgo, etc. Este panorama hacía muy necesario un soporte vertebrador, un sistema de información que agrupara y ordenara toda esa masa de datos.

La transformación de ese cúmulo mas o menos inconexo en un instrumento resolutivo, requiere un proceso largo en el que se han dado algunos pasos, de los que quizás el mas importante haya sido el diseño de ARQUEOS. La información dispersa recopilada y volcada en el inventario de yacimientos y en el resto de los documentos de protección no era suficiente para solventar los problemas que planteaba la gestión diaria del Patrimonio Arqueológico. La consulta uno a uno de los ficheros susceptibles de contener información sobre cada sitio arqueológico era aparte de lenta ineficaz. Pero además la incorporeidad de la mayoría de los sitios arqueológicos, el carácter simbólico de su caracterización espacial limitaba drásticamente su operatividad, era imprescindible dotarlos de entidad territorial para hacerlos valer en los estudios y proyectos territoriales. Se necesitaba una base cartográfica adecuada, en la que como mínimo se pudiese delinear un polígono de delimitación. El mapa a escala 1:10.000 encargado por la Agencia de Medio Ambiente para construir el Sistema

de Información Ambiental de Andalucía (SinamBA) sobre un soporte SIG, y editado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, se reveló como la cartografía mas adecuada, dado que el 1:25.000 que comenzaba a editarse por el Servicio Cartográfico Nacional, pese a su fácil manejo y fiabilidad en el campo, no presentaba unas posibilidades de precisión y disponibilidad equiparables (hoy aún no está completo el territorio de Andalucía).

Los datos que acompañaban a esta cartografía también debían ampliarse y adaptarse a las nuevas obligaciones de gestión. Se modificó la ficha permitiendo localizaciones poligonales, descripciones mas exhaustivas, relaciones completas de propietarios, localizaciones catastrales ajustadas, etc. Sin embargo el ritmo de actualización del antiguo inventario situacional era y es lento, con lo que buena parte de la información se volcó sin revisar ni adaptar en las nuevas fichas.

De esta situación se parte en la elaboración por parte del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de la base de datos DatARQUEOS que en sus sucesivas versiones no sólo ha conseguido una mayor agilidad en la consulta, sino que ha ido mejorando la calidad de la información filtrando errores evidentes o trasladando a las Delegaciones Provinciales listados de sitios bajo sospecha para su revisión.

Esa pequeña historia del nacimiento de ARQUEOS parece tener sentido, es decir los acontecimientos, las decisiones y los actos se encadenan en una serie lógica. En esa lógica pudiera parecer que los actos se pliegan a los acontecimientos: que las respuestas legales a los problemas del patrimonio generan actuaciones administrativas que buscan resolverlos. Sin embargo no siempre es así, los historiadores sabemos que el sentido se puede introducir a posteriori. Por ejemplo desconocemos en qué momento y qué instancia decidió optar por una base de datos convencional y no por un sistema de información geográfica, pero hay que admitir que con los medios disponibles y las exigencias de destreza y equipos de los SIG fue una decisión oportuna, que facilitó la informatización del catálogo. Esta circunstancia ha hecho asequible la información sin apenas adiestramiento y ha

permitido que el esfuerzo se vuelque no en el descubrimiento de las deslumbrantes posibilidades de consulta compleja del SIG sino en la simple y llana aplicación de la información a la protección del Patrimonio Arqueológico, que ha sido el uso principal que se ha venido haciendo de ARQUEOS desde su puesta en marcha.

### 3. BASES DE DATOS, DATOS DE BASE

En la actualidad la base cuenta con mas de 11.000 registros, lo que supone 1 sitio arqueológico por cada 8 km<sup>2</sup> (0.125 x km<sup>2</sup>), si estimamos muy a la baja una media de 1 ha por sitio y descartamos los entornos, el catálogo pone bajo cautela el 0.13 % del territorio de Andalucía. Si, siendo mas realistas, estimamos en 2 has la media e incluimos los entornos podemos acercarnos al 0.5 %. Si además tenemos en cuenta que las sierras, que ocupan mas de la mitad del territorio de la comunidad, están muy poco o nada prospectadas la cifra puede incrementarse hasta el doble.

Por lo general la información que contiene se utiliza para la inclusión de cautelas patrimoniales en los planes, programas o proyectos que supongan una alteración de la realidad arqueológica. Esas cautelas se fijan mediante las tres vías que proporciona el marco legal vigente (Zafra, 1996: 230): la patrimonial, la urbanística y la medioambiental.

La aplicación de un enfoque territorial a la protección no se circunscribe a la exigencia de delimitar con relativa precisión los sitios afectados por declaraciones de B.I.C., de servidumbre arqueológica o por catalogaciones, sino que salta al amplio campo de la ordenación del territorio convencional (Planes Especiales, Planes Generales de Ordenación, Normas Subsidiarias, etc.) y de la protección ambiental (declaraciones de impacto ambiental, calificaciones ambientales, etc.) y aquí se desarrolla el núcleo duro de la protección del patrimonio arqueológico: identificar (Catálogo) para fijar cautelas (Planeamiento) y corregir afecciones (estudios de impacto).

Esta aplicación preventiva de la información de ARQUEOS se complementa con un uso puni-

tivo, no hay que olvidar que las leyes además de para fijar unas reglas de acción y un marco de convivencia, se establecen para gestionar las infracciones y en este sentido el Catálogo es fundamental, dado que muchas de las actuaciones legales se apoyan en la presencia de los sitios arqueológicos en el mismo. En este sentido cada día son mas numerosas las demandas de información del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, ante el volumen de obras en el medio rural y el nivel de organización y asistencia legal que están alcanzando las asociaciones de detectoaficionados.

La creciente presión legal y fáctica sobre el patrimonio exige del uso del Catálogo una respuesta en paralelo que sólo puede producirse una actualización constante y voluntad política de aplicarlo.

Nuestras leyes estipulan que forman parte del Patrimonio Histórico Arqueológico todos lo bienes de la cultura que se puedan estudiar con metodología arqueológica estén donde estén y tanto si se conocen como si no. En una interpretación amplia, como la que hace Andrea Carandini (1984: 139), el Patrimonio no es un conjunto de bienes catalogados, el Patrimonio es la propia nación: nuestras ciudades, nuestros paisajes, nuestros museos, nuestros archivos, etc. Pero frente a esta interpretación amplia del "todo tiene interés histórico" se impone la lógica pragmática de la actividad diaria y de la práctica del derecho. Por ello la primera preocupación del legislador es la de fijar el tipo de elementos susceptibles de ser considerados Patrimonio Histórico. El Catálogo se instaura así como elemento legalizador de la práctica de la protección y aquí es donde mas problemas plantea la situación legal de ARQUEOS, ya que éste, estrictamente, no es la sección arqueológica del Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía. Su vocación eminentemente práctica acarrea el mayor de los problemas legales de la protección: su informalidad que implica cierta inseguridad jurídica en algunas actuaciones.

La estructura del Catálogo, fijado en el Decreto 17/1995 de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico, establece cinco categorías patrimoniales (inmueble, mueble, etnográfico, docu-

mental y bibliográfico) y tres niveles de protección (Bien de Interés Cultural, inscripción con carácter específico e inscripción con carácter genérico), el Patrimonio Arqueológico se repartiría entre las categorías inmueble y mueble.

ARQUEOS forma parte del Sistema de Información del Patrimonio Histórico de Andalucía que es una versión digital del Catálogo General, que por su parte no tiene entidad física, ni residencia al tratarse de un conjunto no compendiado de órdenes de la Consejería de Cultura, desperdigadas por centenares de BOEs y BOJAs, declarando o inscribiendo determinados lugares. Este hecho desvirtúa su operatividad, siendo esto motivo serio de preocupación dado que la práctica de la protección (de la catalogación) implica consecuencias legales y económicas que se deben asumir. No se trata sólo de enseñar el patrimonio (en las tres acepciones del término: señalar, mostrar e instruir) sino que también hay que estar dispuestos para defender la legitimidad y capacidad de los valores culturales para hacerse patentes en las relaciones sociales y económicas de nuestra comunidad.

#### 4. SABER Y PODER

El conocimiento es una base para la acción, la acción de catalogar carecería de sentido sin una proyección. Catalogar sirve para conocer, para proteger, para diagnosticar el Patrimonio Arqueológico y también para programar actuaciones que redunden en su conservación y difusión.

Conocer la realidad no es transformarla, pensarlo así supondría aceptar que lo que se investiga no existe antes de la investigación. Sin embargo la conjunción del conocer y el hacer le añaden nuevos valores que la transforman. En los sitios arqueológicos hacer significa modificar la situación legal, alterar derechos y establecer obligaciones: ordenar el territorio.

El control del territorio es una de las primeras formas de poder y su materialización legal, la propiedad, es la principal causa de desigualdad. Nuestra sociedad se encuentra en un estadio que no admite la existencia de tierras de nadie, de hecho hasta la propiedades públicas se gestionan

y posesionan como propiedades privadas del estado, por ello cuando catalogamos afectando los derechos de los propietarios del objeto catalogado, estamos tocando poder, algo tradicionalmente reservado y consentido a otro tipo de profesionales que vienen dirigiendo el estado liberal desde su instauración (abogados, economistas, arquitectos, ingenieros). Somos recién llegados y debemos abrirnos hueco. Pero esto no es fácil. Como a recién llegados nos ocurre, no ya que se desconfíe de las consecuencias de nuestras acciones, cosa que podría considerarse lógica y hasta saludable, sino que se pone en duda su legitimidad, demonizándolas.

Gilles Deleuze decía que la diferencia entre los demonios y los dioses estriba en que estos tienen atributos, propiedades y funciones fijas: tienen que ver con los suelos, las lindes y los catastros. Lo propio de los demonios, por el contrario, es saltar los intervalos y de un intervalo a otro (1980: 49). En este sentido las catalogaciones son demoníacas porque transgreden los sacrosantos límites de la propiedad, verdadero Dios en este mundo sin tierras de nadie. Se convierte así en una actividad impía que busca estigmatizar la tierra marcándola como inhábil para cualquier uso que no sea su consagración al servicio del Patrimonio Histórico.

Es indiscutible que hay que aceptar un cierto punto de razón en las reivindicaciones de claridad y cobertura legal de los afectados, reconocido y alentado por la propia organización administrativa del estado, pero también hay que reconocer que el ordenamiento jurídico está diseñado para asegurar las garantías de dominio y uso privado de los bienes y por tanto que las leyes de patrimonio sólo en primera instancia suponen una cierta cortapisa a este dominio.

La práctica de acotar los ámbitos dignos de protección afecta, como es natural, a las posibilidades de explotación del sitio pero no de un modo absoluto sino como una imposición legal que persigue la conservación de los valores de un bien común. En ocasiones la propia estructura administrativa se encarga de hacer inviable la protección al imponer unas exigencias de cumplimentación y tramitación que la plantilla y los presupuestos de la Consejería de Cultura está

muy lejos de poder asumir. La inclusión legal de un bien en el Catálogo se convierte en un proceso de años con un procedimiento que requiere el concurso de arqueólogos, abogados y propietarios y la implicación de la administración cultural, la municipal y el catastro. Si tenemos en cuenta que son miles de registros la simplificación del procedimiento debe ser una meta a conseguir.

La práctica de la protección del Patrimonio Arqueológico impone que todas las zonas arqueológicas, sean o no conocidas estén en la superficie o en el subsuelo son integrantes del Patrimonio Histórico, sino formalmente sí en potencia y como tales deben protegerse. Esto ha desarrollado una variante especial de catalogación que podríamos denominar catalogación sobrevenida que permite inscribir en el catálogo elementos que pese a ser conocidos y estar incluidos en ARQUEOS se encuentren amenazados e indefensos. Esto no es mas que un síntoma de la debilidad del sistema.

Para fomentar la efectividad protectora quizás hubiera sido mas útil que la ley estableciera el mismo mecanismo de inclusión que para el patrimonio documental, así todas las zonas arqueológicas formarían parte del Patrimonio Histórico y sólo sería necesario el conocimiento de su existencia para asegurarles cobertura legal formal, dejando los expedientes de catalogación para casos concretos donde la protección deba ligarse a determinadas normas de conservación. De hecho hay un precedente que ha permitido que existan miles de sitios arqueológicos declarados Bien de Interés Cultural: el artículo 40.2 de la Ley de Patrimonio Histórico Español declara Bienes de Interés Cultural las cuevas abrigos y lugares con manifestaciones de arte rupestre y la Disposición Adicional Segunda de la misma hace lo propio con los castillos protegidos por el Decreto de 22 de abril de 1949; los escudos, emblemas, cruces de termino y piezas similares (decreto 571/1963) y los hórreos y cabazos de Asturias y Galicia (decreto 449/1973).

¿Qué problema habría en redactar un decreto o una modificación de la Ley andaluza en términos similares?

No obstante una solución de ese tipo no supone necesariamente la panacea, queda el

miedo a que el Catálogo con sus formalidades y sus fundamentaciones legales sea, pese a todo, un instrumento mal afinado que necesite refuerzos legales y políticos constantes para una aplicación eficaz. Como muestra de la pertinencia de este temor basta un caso que recientemente se ha fallado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La Sala 1ª del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía acaba de condenar a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a indemnizar a una empresa promotora que demolió un tramo de la muralla de Jaén para construir viviendas. ¿defecto de forma? no; ¿plazos incumplidos? no; ¿entonces? sencillamente la sala ha decidido que el muro demolido no es la muralla. Considera probado que la presencia de cemento (utilizado por primera vez en Andalucía en 1902) “en la pared a la derecha a dos metros de altura” demuestra que el muro es posterior a 1900 y por ello sin valor histórico. Disparate parejo a pretender averiguar la edad de Sara Montiel, pongamos por caso, fechando su maquillaje (como es natural el ejemplo es válido no por los años de D<sup>a</sup>. Sara sino por su valor cultural).

No valieron al Tribunal ni el informe científico de la excavación arqueológica, ni los informes técnicos de la Consejería, que sólo hablaban de cerámicas, siglos y métodos, se embelesó con la precisión técnica del análisis químico encargado por la empresa promotora que descubrió una providencial sustancia antihistórica y una fecha mágica: el cemento y 1902, y con él una excusa perfecta para justificar la demolición. Se restauró con hormigón el Coliseo, demuélese, la plaza de España en Sevilla es de 1929, demuélese.

Es tan evidente el error del tribunal que si no fuera por el precedente nefasto que sienta no merecería la pena comentarlo. ¿No se han dado cuenta de que lo que le han vendido como un dato cierto, con serlo no demuestra nada?, claro que hay cemento en ese tramo de la muralla y seguramente pintura plástica que se inventó mucho después, ¿no ven que hasta que se ha demolido era la medianera entre dos viviendas? También lo hay en la catedral de León y en el Prado y en la Alhambra... ¿significa eso que el Coliseo o el Palacio Real se construyeron des-



pués de inventarse estas sustancias? Lo mismo vale para la muralla de Jaén. Supina ignorancia la que reduce la totalidad compleja de las cosas a un dato aislado de una de sus partes: la edad de ese modelo despampanante la de sus implantes de silicona, la de aquel mutilado la de su prótesis y la del presidente del tribunal la de su último empaste. Menudo método de fechación, el mayor hallazgo técnico desde que a Libby le dieron el premio Nobel por el carbono 14. Podemos ahorrarnos ya los estudios de materiales y las secuencias estratigráficas y el radiocarbono calibrado, y la termoluminiscencia, y el paleomagnetismo y la dendrocronología y tantos y tantos métodos que con imaginación y esfuerzo han desarrollado las universidades más prestigiosas del mundo, se coge una muestra de donde Dios da a entender se analizan sus componentes por quien sea y ¡voilà! ya está. Se puede perdonar aquí el chiste fácil, la educación no permite otros desahogos a la indignación, sobre todo porque,

según la sentencia, contra tamaña barbaridad no caben recursos.

La primera reacción de estupefacción ante la sentencia deja paso a la preocupación porque con un elemento catalogado, información fiable y clara y con la razón evidentemente de su parte la administración cultural no ha podido defender ni su propia gestión, ni, y esto es más grave, la integridad de un Bien de Interés Cultural.

Sin embargo pese a la empresa promotora, pese al informe de la consultora y pese al tribunal, la muralla de Jaén es, ha sido, la medianera entre la C/ Cerón y la C/ Los Álamos, como confirmará cualquiera con conocimiento. Todavía queda la imagen de dos torres para atestiguarlo y además como revancha irónica de esa realidad negada, el edificio para cuya construcción se demolió la no-muralla se denomina Portillo de San Francisco, rememorando el nombre de la puerta de la muralla descubierta en su solar durante las excavaciones arqueológicas.

## BIBLIOGRAFÍA

---

DELEUZE, GILLES

(1980): Diálogos Gilles Deleuze/Claire Parnet. Pretextos. Valencia

CARANDINI, ANDREA

(1984): Arqueología y cultura material. Mitre. Barcelona

ZAFRA DE LA TORRE, NARCISO

(1996): "Hacia una metodología para el estudio del patrimonio arqueológico". Complutum Extra, 6 (II): 225-239

